



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0335/2017

FECHA: 30 de noviembre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0335/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado el 10 de agosto de 2017 en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, la ahora reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- solicita «*certificado sobre a qué año corresponde la "Oferta de empleo público" a la que está vinculado el puesto que actualmente ocupo como funcionaria interina, categoría "Auxiliar administrativo" en centro docente*».

Mediante Resolución de 26 de agosto de 2017 de la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería de referencia se resuelve conceder la información solicitada y, en consecuencia, se traslada a la interesada que "Según los datos obrantes en esta Consejería, el puesto de trabajo [...], que usted ocupa en la actualidad como funcionaria interina, se encuentra vinculado a la Oferta de Empleo Público, según lo establecido en el artículo 22.7 , párrafo 3º de la Ley 5/2013, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid". Añadiendo en el considerando segundo que "[...] la Dirección General de la Función Pública procede a publicar, con carácter previo a la ejecución de los correspondientes procesos selectivos, los puestos de trabajo que se encuentran vinculados a los mismos".

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



Frente a esta Resolución, por escrito registrado en esta Institución el 4 de septiembre de 2017, la interesada interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. En concreto, argumenta que “considero insuficiente la resolución ya que no me informan del año de la Oferta de Empleo Público a la que está vinculado mi puesto, ni tampoco indican que no se encuentra a ninguno”.

2. El 4 de septiembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Secretario General Técnico de la citada Consejería registrado en esta Institución el 4 de octubre de 2017 se traslada escrito de alegaciones elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de la misma Consejería en el que, en síntesis, se señala lo siguiente:

- *De la documentación obrante en su expediente administrativo se constata la adjudicación a la ahora reclamante del puesto [...] con fecha 21 de octubre de 2010, como candidata procedente de la lista de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de Auxiliares de Administración General, Subgrupo C2, siendo nombrada funcionaria interina mediante Orden de la Consejería de Educación, número 5495/10, de 2 de noviembre de 2010.*
- *Para obtener dicha información se ha consultado la aplicación informática SIRIUS (Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos), herramienta puesta a disposición de todas las unidades de gestión de personal de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a la que corresponde su administración y mantenimiento en coordinación con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.*
- *La Oferta de Empleo Público (OPE) es un instrumento de la Administración, previsto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público para la planificación y provisión de sus necesidades de recursos humanos. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, corresponde a la Dirección General de la Función Pública la programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal, así como la elaboración de la Oferta de Empleo Público*



*Regional y la convocatoria y gestión de los procesos selectivos para el ingreso como funcionario de carrera y personal laboral fijo.*

- *Como instrumento de la política de personal de la Administración, la Oferta de Empleo Público está condicionada, entre otros factores, por las cambiantes necesidades del servicio, lo que en ocasiones puede determinar que los puestos de trabajo a los que la Oferta afecta sufran variaciones.*
- *La información facilitada a la interesada en respuesta a su solicitud es correcta y se corresponde con los datos obrantes en el Sistema Información de Gestión de Recursos Humanos de puestos adscritos a esta Dirección General, que señala que la situación del puesto de trabajo [...] resultó afectada por lo establecido en el artículo 22.7, párrafo 3º de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014, sin que conste referencia de vinculación, en el sistema, a Oferta Pública de Empleo Público alguna. Indicando que, toda la información que se encuentra en el sistema es facilitada por la Dirección General de la Función Pública.*

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el*



*correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta Resolución, por lo que respecta al fondo del asunto planteado cabe advertir que el objeto de la originaria solicitud de acceso a la información planteada, según se desprende del tenor literal de la solicitud remitida a la administración autonómica, es la obtención de un «*certificado sobre a qué año corresponde la “Oferta de empleo público” a la que está vinculado el puesto que actualmente ocupo como funcionaria interina, categoría “Auxiliar administrativo” en centro docente*».

Con relación a ello debemos recordar que el artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “*información pública*”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “*información pública*” como

*“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.*

A tenor de los preceptos mencionados cabe concluir que el concepto de “*información pública*” que recoge la Ley, en función del cual puede plantearse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” -artículo 1 de la LTAIBG-. Esto es, la ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. Por ello, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera, en definitiva, que el ciudadano dispone de vías para obtener certificaciones expedidas por la administración entre las cuales no se encuentra la LTAIBG, de modo que siguiendo el criterio fijado en



anteriores Resoluciones -entre otras, las números R/0118/2016, de 22 de junio y RT/0112/2016, de 30 de septiembre- procede desestimar la reclamación presentada con relación a este aspecto concreto dado que el objeto de la solicitud no puede considerarse como “información pública” a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada, por cuanto su objeto no puede considerarse información pública de acuerdo con lo definido en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

